

LOS CATÓLICOS Y LA REFORMA SOCIAL, 1890-1914

*Feliciano Montero García**

1. INTRODUCCIÓN

El estudio del catolicismo social en España, como en general el del reformismo social, ha chocado y todavía en buena parte choca con una serie de prejuicios historiográficos e ideológicos que bloquean o dificultan la comprensión del tema. Antes de nada conviene aclarar que utilizamos la expresión «catolicismo social», ampliamente aceptada por la historiografía internacional sobre el tema, para referirnos a dos aspectos de una misma realidad histórica: una, pensamiento o reflexión doctrinal, marcada desde *Rerum Novarum* por una serie de encíclicas que configuran la llamada «doctrina social de la Iglesia»; y otra, una serie de obras y organizaciones relacionadas con la acción social de los católicos.

El descuido e incluso cierto «desprecio» en el estudio del reformismo social y de las instituciones pioneras como la Comisión de Reformas Sociales (CRS), el Instituto de Reformas Sociales (IRS), y el Instituto Nacional de Previsión (INP), es seguramente reflejo de un juicio de valor previo sobre la supuesta debilidad y retraso del reformismo social español. Un conjunto de leyes protectoras que además de retrasadas apenas habrían sido aplicadas. Un reformismo social eminentemente «defensivo», nacido del temor a la revolución, arrancado por el movimiento obrero a las clases propietarias. Los propios propagandistas de la reforma social, como en general todos los regeneracionistas, contribuyeron con sus estudios comparados a esa imagen del retraso español en todos los terrenos. Para ellos la mirada

* Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares.

comparada con otros países europeos más avanzados era una coartada y argumento para reivindicar e impulsar las reformas sociales en España¹. Posteriormente la historiografía obrerista que tanto pesó en los años setenta apenas tocó el tema de la reforma social como tampoco el de las relaciones laborales y la conflictividad social desde otra perspectiva que no fuera la del propio discurso de las organizaciones obreras. El estudio histórico de la reforma social se ha recuperado finalmente con ocasión de las conmemoraciones centenarias de las instituciones pioneras, la CRS y el IRS.

La historiografía española del catolicismo social participa también de esos bloqueos y prejuicios que todavía hoy dificultan un estudio ajustado del tema. Durante mucho tiempo pesó en los historiadores españoles, católicos o no, la tesis del «fracaso del catolicismo social español». Una tesis o tópico puesto en circulación, con intenciones autocríticas, por los propios propagandistas en su combate por impulsar un catolicismo social menos paternalista o más comprometido. Era sobre todo el combate del canónigo asturiano Arboleya, ampliamente recogido por su biógrafo Domingo Benavides; pero también el del propio Severino Aznar y el Grupo de la Democracia Cristiana en los años veinte frente a las denuncias integristas. La verdad es que el testimonio y el juicio de los propagandistas y protagonistas de la historia no es nunca desdeñable, por más que haya de ser sometido a crítica. Ciertamente en el plano de la sindicación obrera el fracaso del catolicismo social anterior a 1936 es irrefutable si se considera el débil arraigo e implantación del sindicalismo obrero católico en comparación con la UGT y la CNT. No se puede decir lo mismo del sindicalismo católico agrario o movimiento cooperativo de pequeños propietarios en torno a la Confederación Católica Agraria (CONCA), ampliamente implantada e influyente especialmente en la meseta norte. Igualmente no se puede aplicar la tesis del fracaso a la presencia y aportación del catolicismo social en los orígenes de la política social del Estado. Si hay una directriz de *Rerum Novarum* pronto bien entendida y seguida por los católicos sociales españoles es la del intervencionismo social del Estado. En los trabajos y conclusiones de los Congresos Católicos nacionales de los años noventa del siglo XIX se puede seguir esa recepción. No es extraño pues encontrar señales de esa amplia presencia católica en el IRS y especialmente en el INP.

Todavía hoy domina la idea (otro tópico historiográfico) de que la reforma social en España fue obra exclusiva o predominante de los liberales y republicanos reformistas vinculados al krauso-institucionismo, repre-

¹ Véase especialmente los trabajos de A. Buylla y de Adolfo Posada. *A posteriori* el propio A. Posada en sus memorias desde el exilio recordaba con nostalgia y elogio la labor del IRS y del propio sistema parlamentario de la Restauración, rebajando la mirada crítica anterior.

sentados especialmente por Gumersindo de Azcárate y los profesores de Oviedo «fichados» por Canalejas para el Instituto, Adolfo Posada y Adolfo Buylla. Sin negar la importancia incluso hegemónica, al menos inicialmente, de este grupo, se va reconociendo progresivamente la convergencia y colaboración de católicos, conservadores y liberales en la gestación del Estado social. Es el testimonio coetáneo de los protagonistas el que reconoce lo que los historiadores con frecuencia han tendido a ignorar. Canalejas y Dato, Posada y Sangro se estiman y reconocen recíprocamente como copartícipes en una misma tarea, compartiendo iniciativas y responsabilidades. Lo que resulta tanto más relevante y paradójico es que ese encuentro en el terreno de la reforma social coincide en el tiempo (primera década del siglo XX) con la fuerte polémica clericalismo-anticlericalismo en torno a los proyectos secularizadores, en la que se ven envueltos los mismos protagonistas. En relación con esto, la interpretación de T. Glick sobre «la ampliación del discurso civil» de las elites españolas en las primeras décadas del siglo XX; y su reflejo en la colaboración y trabajo conjunto en distintas instituciones científicas [la Junta de Ampliación de Estudios (JAE), la Asociación para el Progreso de las Ciencias], y entre ellas, también las impulsoras de la reforma social, como el IRS, el INP o la Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores, puede servir para entender esta aparente contradicción². La ruptura de la guerra civil y la inmediata postguerra quebró ese proceso de convivencia consensuada de las elites, y, de paso, bloqueó la comprensión historiográfica de ese pasado anterior a la guerra civil³.

Así pues, tras un breve recordatorio del significado y alcance de la publicación de la *Rerum Novarum* como factor de desarrollo del catolicismo social, y especialmente como factor legitimador del intervencionismo social del Estado⁴, interesa aquí sobre todo replantear la cuestión de los

² Thomas F. Glick, «Ciencia, política y discurso civil en la España de Alfonso XIII», en Simposio «La España de Alfonso XIII, 1902-1931. Las elites españolas en la transición del liberalismo a la democracia» (noviembre de 1989, UNED), Separata de *Espacio. Tiempo y Forma*, 6 (1993) págs. 81-97.

³ La trayectoria biográfica de uno de los principales representantes del catolicismo social, Severino Aznar, es muy significativa al respecto: su reivindicación *a posteriori*, en claves nacional-católicas y nacional-sindicalistas, del catolicismo social anterior a 1936.

⁴ En este artículo utilizaré ampliamente mis trabajos anteriores sobre el primer catolicismo social en España y sobre la aportación de los católicos sociales españoles a los orígenes de la política social: *El primer catolicismo social y la Rerum Novarum en España* (1983); el artículo «Los católicos españoles y los orígenes de la política social» en *Studia Histórica*, 4 (1984); *Orígenes y antecedentes de la Previsión Social*, vol. I de «Los seguros sociales en la España del siglo XX» (1988); «Conservadurismo y cuestión social» en J. Tusell y otros (eds.), *Las derechas en la España contemporánea*, (1997); «La crítica católica de la economía clásica» en Fuentes Quintana, E., *Economía y economistas españoles*, 2001, vol. V, págs. 451-493. Además para todo lo relacionado con el primer catolicismo social, sus obras y orga-

encuentros, convergencias y colaboraciones de los católicos sociales con otros propagandistas e intelectuales en las iniciativas e instituciones de la reforma social, el Instituto de Reformas Sociales, el Instituto Nacional de Previsión y la Sección española de la Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores (AIPT). Con el objetivo finalmente de intentar perfilar los caracteres específicos de la aportación católica a la reforma social; los criterios que la definen en comparación con los planteados por los «institucionistas».

2. LA LEGITIMACIÓN DEL PRINCIPIO «INTERVENCIONISTA» EN LA *RERUM NOVARUM*

La propuesta reformista del catolicismo social se encuentra definida y perfilada en la *Rerum Novarum* (RN): sus contenidos doctrinales y sus orientaciones prácticas. La especificidad de la aportación del catolicismo social (también el español) a la reforma social se encuentra contenida en RN. De ella hay que partir y a ella hay que referirse si se quiere entender la identidad reformadora del catolicismo social. Ahora bien, RN es por un lado la plasmación y culminación de un proceso de reflexión y acción de ciertas individualidades y grupos; y por otro el punto de partida de una nueva reflexión y de nuevas experiencias e iniciativas. En tanto que punto de llegada la RN se sitúa en una posición intermedia entre el neocorporativismo y el reformismo paternalista del orden liberal: las dos escuelas del catolicismo social que debaten en los congresos que preceden a la publicación de la Encíclica.

En el plano de los principios o contenidos doctrinales, la RN define una vía intermedia frente al capitalismo liberal puro (en el conjunto del antiliberalismo global) y sobre todo frente al socialismo. Legitima una cierta intervención del Estado en la delimitación de algunas condiciones laborales (rompiendo con el principio abstencionista); pero rechaza una intervención excesiva que anule o limite las competencias e iniciativas de la familia, los cuerpos profesionales y la Iglesia. La intervención del Estado puede llegar a fijar un salario mínimo que tenga en cuenta las necesidades familiares (salario familiar). Combate y recela respecto del Estado liberal secularizador, monopolizador de tareas en las que la Iglesia considera que tiene algo que decir. Ahí reside el fundamento del principio de subsidiariedad que se convertirá en un corrector del intervencionismo y en uno de los criterios básicos de la doctrina social de la Iglesia y de las políticas de

nizaciones es fundamental el libro de J. Andrés Gallego, *Pensamiento y acción social de la Iglesia en España*, 1984.

las democracias cristianas. Frente a la lucha de clases y la violencia revolucionaria, la RN defiende la necesidad de reconstruir unas relaciones armónicas y de necesaria colaboración (organicismo corporativista). De acuerdo con este ideal (utópico) armónico prefiere un modelo asociativo sindical o profesional mixto, pero deja abierta la puerta al asociacionismo obrero «puro».

En el plano de las orientaciones prácticas la RN estimula principalmente dos tipos de iniciativas. La promoción de una legislación socio-laboral nueva, protectora de ciertas condiciones laborales (principalmente sobre el trabajo de la mujer y los niños, el descanso dominical, y los jurados mixtos...); y la formación de sociedades obreras cristianas (sindicatos) para la defensa de los legítimos intereses profesionales, lo que llevaría a la constitución de un sindicalismo cristiano alternativo y competitivo con los otros sindicatos revolucionarios. Ahora nos interesa centrarnos en la primera de esas proyecciones políticas: la contribución del catolicismo social en los inicios y primer desarrollo del nuevo Estado social, y del nuevo derecho laboral, dejando a un lado la cuestión del sindicalismo cristiano⁵.

En efecto, entre las principales aportaciones de *Rerum Novarum* está su doctrina sobre el legítimo y necesario intervencionismo social del Estado, en defensa de unas condiciones laborales mínimamente dignas para los «menores»: los niños y las mujeres. Un intervencionismo tachado por los «liberales puros» de socialista (el peligroso socialismo de Estado de Bismarck), pero muy prudente y moderado, que no debería ahogar la principal responsabilidad e iniciativa de la familia, los grupos intermedios, y la propia Iglesia. Un intervencionismo «subsidiario».

La doctrina de León XIII en RN, en este como en otros temas, incide directamente de forma oportuna en la controversia intelectual y política del momento sobre la «revisión del liberalismo económico» y los inicios del «Estado social» o de la política social; debate suscitado en buena medida por las primeras leyes sobre seguros sociales obligatorios de Bismarck (en los años ochenta), y por las primeras reuniones internacionales para acordar algunas leyes sociales protectoras.

En el contexto que precede a la publicación de RN, León XIII y algunos católicos sociales están al tanto de esa controversia y participan en esas primeras convocatorias. El Papa envía su adhesión a la convocatoria de la Conferencia de Berlín (1890). El católico suizo Gaspart Descurtins participa en esas primeras reuniones internacionales (Zurich, 1897). El francés

⁵ Una reciente síntesis sobre la cuestión de los partidos y sindicatos católicos en la España del siglo xx, en J. M. Cuenca, *El catolicismo social en España*, 2003, Unión edit.

Albert De Mun, impulsa en Francia las primeras leyes sociales y demanda acuerdos internacionales⁶.

Esta sanción del principio intervencionista en la doctrina de RN venía a zanjar en buena medida un largo debate, en el interior del catolicismo social, entre «liberales paternalistas» y conservadores corporativistas sobre el mejor orden económico y social. Aunque el debate y las tendencias siguieron subsistiendo y reproduciéndose especialmente en torno a la naturaleza «mixta» o puramente obrera de las asociaciones o sindicatos profesionales.

3. LA RECEPCIÓN DE *RERUM NOVARUM* EN ESPAÑA Y EL IMPULSO CATÓLICO A LOS PRIMEROS PASOS DE LA LEGISLACIÓN SOCIAL (1890-1902)

Prácticamente el tiempo que va entre la creación de la Comisión de Reformas Sociales y la del Instituto de Reformas Sociales coincide con el despegue del primer catolicismo social en España en el contexto de lo que se puede denominar primera recepción de RN. Una recepción que se produce no sólo en medios católicos, pues la Encíclica de León XIII tuvo una amplia repercusión en medios intelectuales y políticos, especialmente a propósito de la cuestión intervencionista. A ello nos referimos cuando hablamos de una «recepción política» de la Encíclica. En efecto, la primera y más favorable recepción de la RN se produjo en medios gubernamentales conservadores (canovistas), pues la encíclica contribuía a legitimar el giro social intervencionista del propio Cánovas (discurso en el Ateneo de Madrid en 1890, mirando a Bismarck), y de algunos publicistas como Sanz y Escartín.

Una buena parte de las lecturas políticas de la RN en España gira en torno a la cuestión del intervencionismo defendido por la Encíclica: los conservadores canovistas parecen los más receptivos; chocando en esto con los recelos católicos integristas frente al Estado liberal; también son bas-

⁶ Para el contexto internacional antes y después de la RN véase M. Turmann, *Le développement du catholicisme social depuis l'encyclique Rerum Novarum*, Paris, 1900 traducido por S. Aznar. Especialmente el capítulo V sobre «La intervención de los poderes públicos», y el IX sobre «La protección internacional del trabajo y de los trabajadores». Entre los apéndices incluye uno dedicado a reseñar las «Leyes y proposiciones de ley debidas a la iniciativa de los católicos sociales» en Francia, Bélgica y Suiza. En la reunión de Zurich (1897) participa solo un español, el católico valenciano Rafael Rodríguez de Cepeda. Sobre los antecedentes y primeros pasos de la Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores, véase P. Sangro y Ros de Olano, *La evolución internacional del derecho obrero*, Madrid, 1912, dedicado «a mi amigo y maestro Adolfo Posada».

tante receptivos los liberales republicanos próximos a la Institución Libre de Enseñanza (ILE) preocupados por la reforma social. En este sentido los recelos de Azcárate ante el riesgo de nuevas formas de «teocracia» católica no invalidan la fundamental simpatía con que miran la publicación de la RN y el desarrollo del catolicismo social.

La mejor ilustración de la inmediata recepción y utilización política de la RN es el debate parlamentario sobre un proyecto de descanso dominical presentado por Cánovas en 1891, coincidiendo prácticamente con la publicación de la RN. En dicho debate los conservadores apelan a la Encíclica para legitimar sus propios proyectos sociales frente a los integristas que, dejando a un lado la dimensión social del proyecto, se centran en la crítica al régimen de tolerancia religiosa de la Constitución de 1876, y en la defensa de la competencia exclusiva o preferente de la Iglesia en una cuestión eminentemente religiosa como el cumplimiento del precepto dominical⁷. Como veremos más adelante el solapamiento de la cuestión político-religiosa en la cuestión social siguió planteándose en sucesivos debates parlamentarios en 1900 y 1904 de sendos proyectos de ley.

La lectura de la RN por parte del catolicismo español no es inicialmente muy comprensiva, pero a partir especialmente de 1894 («peregrinación obrera» y fundación de las primeras revistas católicas sociales y de la Asociación General para el estudio y defensa de los intereses de las clases trabajadoras) es bastante fiel y sincera. Ahora bien, para los católicos españoles la Encíclica no era tanto punto de llegada, pues la reflexión y las experiencias previas sobre los temas de la RN habían sido muy escasas, sino punto de partida

La interferencia hegemónica de la «cuestión carlista» y del integrismo, y la consiguiente resistencia de amplios sectores de la jerarquía y del clero a la consigna accidentalista (o posibilista) de León XIII en relación con el sistema canovista no impide ni bloquea la comprensión y aplicación de la doctrina social de RN, aunque la condiciona. Tiende a subrayar los contenidos más tradicionales de la Encíclica (la raíz moral de la cuestión social; la validez de la caridad cristiana como alternativa; el ideal armónico de los antiguos gremios resucitados en las asociaciones mixtas, etc.), pero asume también las «novedades» de la RN: la doctrina del salario justo (familiar), el principio del asociacionismo obrero (incluso separado), y,

⁷ Sobre las distintas «lecturas políticas» de la RN véase F. Montero, *El primer catolicismo social... op. cit.* págs. 71-122; y en concreto sobre la recepción del grupo «institucionista», págs. 100-110. Sobre la utilización de la RN en el debate sobre el descanso dominical, págs. 84-88. El solapamiento de la cuestión político-religiosa en la cuestión social se reproduciría en los debates posteriores de 1899 y 1904 sobre los respectivos proyectos de descanso dominical.

sobre todo, el legítimo intervencionismo social, protector, del Estado. En todo caso, las reticencias católicas (especialmente la integrista) al intervencionismo del Estado lo son más al Estado liberal (monopolizador) que al principio mismo social proteccionista.

Dentro de un proceso progresivo de recepción y maduración de los nuevos principios de la RN conviene señalar algunas fases que se corresponden con los primeros pasos del catolicismo social en España: hasta 1894, momento de recepción efectiva y comprensiva de la RN en el Congreso de Tarragona; hasta 1900-1902, fin de los Congresos Católicos y primeros intentos de constitución del Movimiento Católico como un proyecto global y unitario que trata de coordinar las distintas obras católicas, propagandísticas, escolares, sociales y políticas. Entre 1906 y 1912, al hilo de la celebración de las primeras Semanas Sociales van madurando un pensamiento y unas obras sociales estrechamente influidas por la experiencia del catolicismo social europeo. Entre esas Semanas Sociales, la de Barcelona en 1910 es la que más relación tiene con el tema que nos ocupa: la participación de los católicos en los orígenes del Estado social.

Las pistas para el seguimiento de la recepción española de las ideas y las experiencias del catolicismo social europeo se pueden rastrear en las revistas católico-sociales: El *Boletín del Consejo Nacional de Corporaciones católico-obreras (CNCCO)*, la *Revista Católica de Cuestiones Sociales*, la *Revista Social* de Barcelona, y la *Paz Social*. Todas ellas son un buen indicador de ese proceso de maduración y de la mirada de los españoles a las experiencias y debate del catolicismo social europeo, belga, francés, italiano... Tema que todavía espera una investigación sistemática.

En relación con nuestro tema de estudio conviene recordar brevemente la recepción concreta del principio del legítimo intervencionismo subsidiario del Estado en los medios del catolicismo social español en la década posterior a la publicación de la RN. El eco del principio intervencionista es claro en las memorias y conclusiones de los Congresos Católicos de fin de siglo, especialmente en el de Zaragoza en 1890, el de Tarragona en 1894, y el de Santiago en 1902. En el de Zaragoza, en el contexto de las celebraciones obreras del Primero de Mayo algunos perciben la novedad de la «cuestión social» hasta el punto de crear una sección especial para su estudio. A ella llegan los criterios «intervencionistas» que están madurando en los preparativos de la RN. Las conclusiones de este Congreso sobre la necesaria intervención protectora del Estado en la regulación de ciertas condiciones de trabajo van a ser reproducidas por los sucesivos Congresos. El de Tarragona, por lo demás, es el que revela una mejor y más completa comprensión de los contenidos principales de la Encíclica, incluidos los

más novedosos y polémicos, como el principio del salario justo mínimo, y la legitimidad del asociacionismo obrero «puro». En el Congreso de Santiago, en 1902, posterior a la aprobación de las primeras leyes sociales de Dato, se recogen los proyectos de reforma sociales que paralelamente había ido elaborando la Asociación General para el estudio y defensa de los intereses de las clases trabajadoras fundada en 1895 en Madrid por el segundo Marqués de Comillas.

La recepción católica del principio intervencionista también se puede rastrear en las pastorales que los obispos dedican a comentar la RN, y en especial las del obispo de Madrid, Sancha, las de los obispos de Barcelona (Catalá) y de Vich (Morgades), y la serie de pastorales del de Orihuela, Maura y Gelabert; así como en los comentarios *ex profeso* de la Encíclica. Entre estos últimos destaca por su difusión en medios católicos y eclesiásticos el del jesuita Antonio Vicent, *Socialismo y Anarquismo*, y el *Catecismo sobre la cuestión social* publicado por el obispo de Huesca Alda y Sancho. Este último catecismo, glosa y comentario fiel de los contenidos de la Encíclica, dedica un amplio capítulo a explicar los deberes del Estado, en general y en particular en relación con las cuestiones laborales, tanto en la protección de «los bienes del alma» (el descanso dominical), como en la defensa de «los bienes corporales y externos», refiriéndose en concreto a la limitación de la jornada laboral especialmente de las mujeres y los niños⁸.

Entre las primeras iniciativas católicas de carácter social puestas en marcha como consecuencia directa de la publicación de la RN se encuentra la Asociación General para el estudio y defensa de los intereses de las clases trabajadoras, fundada en Madrid en 1895 por un grupo de notables, bajo la presidencia del segundo Marqués de Comillas, obedeciendo instancias recibidas de León XIII con ocasión de la «peregrinación obrera» de 1894. Los trabajos de la Asociación madrileña dedicados a poner en práctica la nueva doctrina de RN se centraron en dos objetivos o tareas: fundar Círculos Católicos de Obreros, y preparar proyectos de reformas sociales. En relación con este segundo objetivo, durante el año 1899 se regularizó en la Asociación una labor de información y discusión, en «sesiones de estudio» quincenales, en las que se van elaborando una serie de proyectos sociales⁹.

⁸ Véase V. Alda y Sancho, *Catecismo sobre la cuestión social*, capítulo IX «Deberes del Estado»; y en relación con la regulación de la jornada laboral de los «menores», págs. 120-130, donde reproduce las conclusiones del Congreso Católico de Zaragoza de 1890. El seguimiento de las conclusiones sociales de los Congresos Católicos, y un comentario del libro de A. Vicent en F. Montero, *El primer catolicismo social... op. cit.*

⁹ El *Boletín del Consejo Nacional de Corporaciones católico-obreras* da breve y puntual información de las sesiones celebradas, de los temas tratados y de los asistentes.

4. PARTICIPACIÓN DE CATÓLICOS SOCIALES EN LOS INICIOS DE LA REFORMA SOCIAL

Si se tiene en cuenta esta posición prointervencionista que defiende la *Rerum Novarum* y la pronta recepción de esta doctrina por el catolicismo español no tiene nada de extraño que políticos e intelectuales católicos participaran activamente desde el principio en la gestación de las primeras leyes laborales y de las primeras instituciones reformistas, el Instituto de Reformas Sociales y el Instituto Nacional de Previsión. En contra de una opinión muy extendida, la obra de la reforma social en España, como ya señalé hace algún tiempo, fue una obra de convergencia y colaboración en la que se encontraron conservadores, católicos y liberales «institucionistas». Se constata fácilmente si se revisa la nómina de dirigentes y funcionarios de esas instituciones, la de los políticos y parlamentarios que promueven las primeras leyes laborales, o la participación en los debates y discursos de las academias y ateneos. Pero la mejor expresión y constatación de esa colaboración es sin duda la Sección española de la Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores, presidida por el católico Pedro Sangro, con la vicepresidencia de Adolfo Buylla.

4.1. Los proyectos sociales de la Asociación General

En el proceso de preparación de las primeras leyes laborales de 1900, que se inicia en 1890 con los dictámenes y proyectos elaborados por la Comisión de Reformas Sociales¹⁰ lo más significativo sin duda, aparte de la directa participación a título individual en la tramitación política y parlamentaria, es el trabajo paralelo elaborado por el grupo de la Asociación General madrileña. Los órganos de expresión del catolicismo social, el *Boletín del Consejo Nacional de Corporaciones católico-obreras* y la *Revista Católica de Cuestiones Sociales* siguen y comentan las distintas iniciativas parlamentarias. Tanto esos comentarios como los proyectos sociales elaborados por la Asociación General permiten, comparándolos con los proyectos gubernamentales, definir las peculiaridades o matices de la contribución de los católicos.

Un comentario del Boletín del Consejo al conjunto de proyectos sociales presentados por Dato al Parlamento en 1899 define bien el grado de

¹⁰ No se ha estudiado sistemáticamente la participación católica, individual o institucional, en la *Información oral y escrita* promovida por la Comisión de Reformas Sociales en 1884-1885, pero probablemente en ella domine más una mentalidad asistencial y benéfica que propiamente social. La mentalidad dominante en el catolicismo anterior a la publicación de *Rerum Novarum*.

acuerdo de la Asociación católica y algunas reservas sobre los riesgos de un excesivo intervencionismo. En primer lugar, aceptando la validez de los modelos europeos, se pide un esfuerzo de adaptación a las circunstancias y condiciones de producción de la débil industria española. Justifica el trabajo del niño por razones de productividad («la productividad se resiente» si se establecen horarios distintos para el adulto y el adolescente), junto a otras razones morales y sociales («privando al padre de la remuneración obtenida por el hijo y exponiendo a éste, entregado por completo a la holganza, a riesgos harto más graves para su desarrollo físico y para su cultura intelectual y moral que los que pueda ofrecer el trabajo moderado que se le impone en el taller o en la fábrica»). Se pretendía «conciliar suave y prudentemente el interés del patrono y la debilidad de la infancia, que debe obtener la protección decidida del Estado». En relación con el proyecto de «descanso dominical» se recordaba que no se trataba sólo de una «medida higiénica». Y por otra parte se proponían otros dos proyectos además de los tres presentados por Dato: uno para la creación de Comités de conciliación y Tribunales de arbitraje, y otro para la reconstitución de los pósitos como remedio a la ausencia de crédito agrícola¹¹.

En general en los comentarios de la Asociación católica sobre los primeros proyectos gubernamentales se advierte siempre sobre una posición excesivamente intervencionista, tanto en relación con el trabajo de los niños, como respecto a la fijación obligatoria y universal de salarios mínimos o jornadas laborales máximas y frente al sometimiento obligatorio al arbitraje de los Consejos de Conciliación. En suma, la Asociación detrás de sus matizados reparos a un exceso de intervencionismo, con cuyo principio protector por otra parte estaba de acuerdo, expresaba intereses patronales y económicos (de productividad) que habrían de ser salvaguardados. En este sentido el punto de vista de la Asociación General madrileña reflejaba una de las tendencias del catolicismo social europeo, la más reacia al intervencionismo estatal, la más confiada en las iniciativas «paternales».

En la memoria de los trabajos de la Asociación del año 1899 se presentan los once «proyectos o proposiciones de ley», que pueden ser agrupados en dos bloques. El primer conjunto de proyectos sobre «crédito agrícola, auxilio a las pequeñas industrias agrícolas, préstamos a interés, obras públicas, sindicatos de obreros, inútiles de la guerra y del servicio militar, tiende más bien al desarrollo de una política económica proteccionista. El segundo bloque se refiere a los temas más específicamente laborales, sobre el descanso de los días de fiesta, el trabajo de la mujer, el trabajo de los niños, los jurados mixtos de patronos y obreros, y los accidentes de traba-

¹¹ *Boletín del Consejo...* (1899).

jo. Conjunto de proyectos paralelos a los presentados por Dato en ese mismo año y con los que valdría la pena establecer una comparación para valorar el grado de convergencia de los proyectos católicos con los gubernamentales.

En la presentación de los proyectos sociales de la Asociación se aprecia la conjunción del objetivo defensivo, contra-revolucionario, junto a la declaración reformista: «A fin de dar satisfacción a las legítimas aspiraciones de un gran número de obreros que demanda la protección del Estado... disminuyendo o anulando al mismo tiempo la fuerza del partido que se escuda con la bandera de ciertas reformas para ganar adeptos a la revolución». Por otra parte se señalan los límites del intervencionismo: «sin detrimento de los intereses sociales y sin incurrir en el socialismo de Estado». El método de preparación de estos proyectos, tiene un gran paralelismo con el utilizado por la Comisión de Reformas Sociales: «la Asociación ha examinado los antecedentes científicos y legislativos de España y el extranjero; ha llamado a reconocidas autoridades de la cátedra, el foro, la política, la Administración y la Iglesia; ha pulsado la opinión de patronos y obreros, midiendo sus mutuas y legítimas aspiraciones no antagónicas ciertamente desde el alto punto de vista del común interés social».

En julio de 1901 la Asociación General madrileña publicó un segundo bloque de proyectos sociales que en conjunto coincide con los proyectos presentados en 1899, salvo ciertas modificaciones: la supresión obvia de los proyectos que ya son leyes, y la inclusión de dos proyectos nuevos para la creación de una «Caja Postal de Ahorros» y una «Reforma del impuesto de Consumos en Madrid». El proyecto sobre «préstamos a interés» de 1899 ahora se denominaba «contra la usura». El descanso dominical y la constitución de jurados mixtos de patronos y obreros eran los dos proyectos considerados más urgentes, una vez aprobadas las leyes sobre el trabajo de las mujeres, y de los niños, y la responsabilidad industrial en accidente de trabajo. Ambas series de proyectos sociales (la de 1899 y la de 1901) fueron presentadas en el Congreso Católico de Santiago por la Asociación General y el Consejo Nacional de Corporaciones católico-obreras, pasando a formar parte en gran medida de las conclusiones de la sección cuarta, entre las competencias del Estado para la mejora de la situación material de las clases trabajadoras¹².

¹² Sobre la actividad de la Asociación General y sus proyectos sociales, véanse sus memorias anuales; cfr. F. Montero, *El primer catolicismo social... op. cit.*

4.2. El descanso dominical o semanal

Entre todos los proyectos sociales promovidos por los católicos sin duda el del descanso dominical es quizá el que mejor representa la conjunción de objetivos e intereses católicos en su impulso a la reforma social. Es también el que mejor refleja las diferencias, en el interior del mundo católico entre los conservadores e integristas, y sobre todo con los «institucionistas». Por ello merece un estudio especial el caso específico y sintomático de la tramitación parlamentaria de los sucesivos proyectos sobre «el descanso dominical», presentados en 1891, 1899 y 1904. Todavía después de aprobada la Ley de 1904 su aplicación siguió suscitando debate entre católicos y secularizadores.

La presentación por parte del Gobierno Cánovas, en 1891, de unos primeros proyectos sociales (sobre el descanso dominical, y sobre el trabajo de la mujer y los niños) coincidirá prácticamente con la publicación de *Rerum Novarum*. El Gobierno tratará de aprovechar esa circunstancia para conseguir el apoyo de la Iglesia a uno de esos proyectos, el de descanso dominical, que además de su contenido social, implicaba otras cuestiones relacionadas con la siempre difícil aplicación del artículo 11 de la Constitución de 1876.

La dimensión social del proyecto va a chocar con el problema político-religioso hasta el punto de quedar bloqueado tanto en 1891 como en 1899. Lo que verdaderamente interesaba y movilizaba a la opinión pública española, dentro y fuera de la Iglesia, era el estatus de la Iglesia en la constitución de 1876, en el marco del Concordato de 1851 aún vigente. En este contexto el contenido social del proyecto de descanso dominical quedaba fuertemente devaluado, en comparación con el contenido político-religioso en él implícito. La definición misma del proyecto, «descanso dominical» para unos, «descanso semanal» para otros, y la jurisdicción pertinente en el control de su cumplimiento (puramente eclesiástica según la mentalidad integrista, al considerarlo un precepto religioso), o eminentemente civil, (tratándose de una cuestión laboral cuya regulación correspondería a un Estado «tolerante») son las cuestiones de fondo que se debaten.

Mientras el Gobierno conservador trata de apoyar su propuesta en la reciente Encíclica y en el principio intervencionista que en ella se defiende, los católicos estaban más preocupados por reafirmar los derechos de la Iglesia, de acuerdo con el Concordato de 1851. A los católicos lo que más les importaba del proyecto de descanso dominical era la salvaguarda de su carácter de fiesta religiosa, y, por tanto, de la prioritaria intervención de la Iglesia en su regulación. De acuerdos con estos criterios sería rechazable

la expresión «descanso semanal», y la regulación permisiva de ese descanso, como una aplicación más del principio de «tolerancia» introducido en el artículo 11 de la Constitución de 1876.

En suma, la tramitación parlamentaria del proyecto de descanso dominical, en 1891-1892 revela la politización de un proyecto social, a la vez que la eficacia de la presión eclesiástica. El Gobierno conservador, por su parte, aprovecha la ocasión para obtener apoyos y legitimidades, no sólo para su política social, sino sobre todo para el régimen constitucional, siempre puesto en entredicho por la mayoría de los católicos. La convergencia de intereses entre la Iglesia y el Gobierno conservador hacía posible el acuerdo casi pleno, según reconoce el propio nuncio, sobre el proyecto de descanso dominical. El debate en el Senado con las intervenciones «integristas» de un lado, y liberal-republicanas de otro, pusieron en peligro un pacto, que definitivamente se rompió en el Congreso, haciendo inviable la aprobación del proyecto de 1891 y los sucesivos hasta la Ley de 1904. Habrá que esperar a esa fecha para que un proyecto un poco más civil y secular, en un clima igualmente laicista pero mucho más pro-intervencionista, pueda convertirse en ley¹³.

4.3. Los católicos en el Instituto de Reformas Sociales y el Instituto Nacional de Previsión

Como se sabe los máximos directivos y gestores del Instituto de Reformas Sociales, Azcárate, Posada y Buylla, habían sido «fichados» por Canalejas en 1902 para su Instituto del Trabajo, pero no tuvieron inconveniente, previas las consultas y consejos correspondientes, en aceptar el mismo encargo para dirigir el IRS creado por el Gobierno conservador; lo que ilustra bien el carácter suprapartidista del IRS, su naturaleza eminentemente «técnica» y neutral, pero también el grado de colaboración de conservadores y liberales en la obra de la reforma social. A. Posada, en sus memorias, da testimonio de este fundamental clima de colaboración, y Pedro Sangro en las memorias de los trabajos de la sección española de la AIPT insiste en la misma idea.

Ahora bien, la concreta participación católica en la dirección y administración del IRS se centró significativamente en la representación de la parte patronal que ostentaron entre otros Dato y el marqués de Comillas. Una representación, en el caso de Dato, algo extemporánea, pero revelado-

¹³ Referencia completa a todo el proceso en F. Montero, «La polémica sobre el intervencionismo y la primera legislación obrera» en *Revista de Trabajo*, 61-62 (1981).

ra de la ausencia, en esos primeros momentos del IRS, de un verdadero asociacionismo patronal. Pero la participación de los católicos no quería reducirse a esta alta representación política y patronal. Su interés por el IRS se refleja desde el principio en la invitación a participar en las elecciones para la representación obrera y patronal del Instituto, y en las Juntas Locales y Provinciales de reformas sociales. Precisamente en la elaboración de los censos electorales de asociaciones previos a la celebración de esas elecciones se suscita la polémica entre conservadores y liberales sobre el carácter profesional (o confesional), y sobre la naturaleza obrera (o patronal) de los círculos y sindicatos católicos¹⁴.

Pero la presencia y el protagonismo de los católicos sociales es especialmente significativa en el Instituto Nacional de Previsión. Como ya señalamos hace algún tiempo los objetivos del INP parecen coincidir plenamente con los del catolicismo social: la protección social de la familia, la educación del pueblo en los valores del ahorro y la previsión; y la misma naturaleza no obligatoria con que nace el Instituto, como promotor y subvencionador de diversas iniciativas de Cajas de Ahorro, mutualidades populares y patronales, bajo el principio de la libertad subsidiada.

Desde los primeros pasos del proceso de gestación del INP se puede observar la presencia de católicos. En los proyectos pioneros de la Caixa de Pensions de Barcelona en 1902 y de la Caja de Guipúzcoa; en la Conferencia de Previsión Popular de 1904 a la que acuden representantes de la mayor parte de las Cajas de Ahorros; y sobre todo, lo más significativo, en la propaganda específica del proyecto del INP que explica directamente su promotor José Maluquer y Salvador en la que se considera primera Semana Social, organizada por Severino Aznar en Madrid, en 1906.

Maluquer abordó en tres conferencias la justificación científico-técnica, social y moral del seguro, y más concretamente del proyecto de creación del INP, aprobado ya por el pleno del Instituto de Reformas Sociales y pendiente de aprobación parlamentaria.

En sus conferencias, Maluquer subraya ante un público católico el carácter eminentemente subsidiario del Instituto que no pretende monopolizar, «sino organizar un motor de nuestra vida nacional en materia de previsión popular». Destaca también en su exposición la posibilidad de abordar, combinadamente con el retiro de vejez, otra de las cuestiones que más preocupan a los católicos, la del acceso a la propiedad del hogar, insistiendo Maluquer en las ventajas sociales que se derivarían del acceso generalizado del proletario a la pequeña propiedad. Maluquer, en un palabra subra-

¹⁴ Véanse artículos en *La Paz Social*.

yaba los puntos de encuentro entre los objetivos del INP y los del catolicismo social. Desde el punto de vista religioso-moral sólo faltaba superar algunos recelos cristianos, por lo que invitaba a sustituir la terminología «seguro de vida» (poco compatible en principio con la fe en la Providencia), por la del «seguro de ahorro»; Maluquer concluía con un llamamiento formal a los católicos y a los patronos a colaborar en la propaganda del INP y a la difusión práctica e implantación del retiro obrero, objetivo primero a desarrollar¹⁵.

Entre los fundadores y primeros administradores del INP figura desde el principio una presencia católica significativa que va incrementándose con el tiempo. El gran impulsor del Instituto Nacional de Previsión, José Maluquer y Salvador, aunque estrechamente relacionado con los católico-sociales, no puede ser considerado en sentido estricto como uno de ellos. Sin embargo algunos de sus colaboradores más estrechos del primer momento (Álvaro López Núñez) o de un poco después (Severino Aznar, Inocencio Jiménez Vicente y el más joven Luis Jordana de Pozas) sí son cualificados representantes del catolicismo social español, miembros los tres del Grupo de la Democracia Cristiana. Álvaro López Núñez, secretario de la administración central del Instituto desde su fundación en 1908 es el gran propagandista de la previsión en medios católicos como atestiguan sus conferencias e informes.

La vinculación directa de Severino Aznar, como la de otros miembros del Grupo de la Democracia Cristiana al Instituto Nacional de Previsión es un poco posterior. Aznar redacta desde 1914, como «asesor social» del INP numerosos informes sobre los diversos proyectos de ampliación y modificación de seguros sociales. En esa prolongada tarea que reanuda, tras un brevísimo paréntesis, ya en 1937 en Santander, lo encontramos especialmente vinculado a la implantación del seguro de maternidad, de enfermedad y del subsidio familiar. La implantación del subsidio familiar con el nuevo régimen de julio de 1936 es la culminación de una de las directrices básicas de su reformismo social y, en definitiva, del reformismo representado por el catolicismo social. Esta directriz estaba presente ya en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas sobre «La abolición del salariado», y más explícitamente, en su estudio de 1931 «Del

¹⁵ La propaganda de Maluquer parece que resultó efectiva a juzgar por la presencia de católicos entre los primeros protectores del INP. En el «Resumen estadístico de 1909-1910», se cita entre los Protectores de la previsión popular el Centro de Defensa Social de Madrid, la Acción Social Popular de Barcelona, La Propaganda Católica de Palencia, el Círculo Católico de Nuestra Señora de Covadonga de Madrid, el Círculo Católico de obreros de Orense, y a título individual, los obispos de Salamanca y Palencia. Cfr. F. Montero (1984), pág. 52.

salario familiar al seguro familiar», contribución del autor a una conmemoración internacional del 40 aniversario de la publicación de la *Rerum Novarum*. La defensa de la familia tradicional está presente como objetivo básico en todos sus discursos y proyectos, e incluso en sus estudios más académicos sobre demografía y sociología. Pero acaso donde mejor se plasma este objetivo es en su contribución como asesor social del INP desde 1914 y, en especial, en los proyectos que desde el Instituto alienta antes y después de 1936: maternidad, enfermedad y subsidio familiar.

Inocencio Jiménez, otro de los zaragozanos fundadores de La Paz Social, trabaja desde los primeros momentos del Instituto y especialmente desde la Conferencia de Seguros Sociales de 1917 en la propaganda de los seguros sociales y en la fundación de la Caja de Previsión Social de Aragón. Desde 1924, como vicepresidente del Instituto, sustituye de hecho a Maluquer, enfermo, y le sucede como presidente del INP durante la Segunda República. Finalmente, Luis Jordana de Pozas, otro miembro del Grupo de la Democracia Cristiana, continúa la tradición de la presencia de católico-sociales en el Instituto.

Diríase que la plana mayor del Instituto fue pronto copada por los católicos sociales. O que el Instituto Nacional de Previsión resultó ser el lugar de acción social preferido por los reformistas católicos, quizá por las especiales posibilidades que ofrecía para la realización de sus objetivos. A través del seguro de vejez, del de maternidad, del escolar, del subsidio familiar, etc., se desarrollaba un amplio plan de protección de la familia, objetivo prioritario de la reforma social católica. De alguna forma en la obra del INP mejor que en ningún otro sitio quedaban reflejados los ideales reformistas del catolicismo social¹⁶.

5. LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES

Al margen de las Instituciones públicas para la reforma social como el IRS y el INP hay una institución semipública en la que encontramos de nuevo a los mismos protagonistas de la reforma social, Sangro y Aznar de un lado, Posada y Buylla de otro, colaborando en proyectos y tareas. Se trata de la Sección española de la Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores, una verdadera plataforma de convergencia y

¹⁶ Reproduzco fragmentos de mi artículo en *Studia Histórica*, 1984, y remito a sus notas.

colaboración de las elites reformadoras, católicas y liberales, constituida en España en 1906 con seis años de retraso respecto a la internacional.

La labor de la sección española de AIPT, según se desprende de las memorias anuales, consistió fundamentalmente en el impulso propagandístico a la reforma social mediante conferencias y publicaciones. Facilitó sobre todo la comunicación con las iniciativas y organizaciones internacionales. Impulsó la constitución de sociedades específicas para la reforma social y moral. Pero, como el propio Sangro critica en 1911, su labor se vio muy mermada por la falta de una infraestructura económica y administrativa mínima, y por el carácter restrictivo y acumulativo de las juntas directivas y socios: un mismo grupo de personas, elites madrileñas, estaban en las mismas asociaciones.

En las memorias anuales de esta Asociación y en sus publicaciones, en su participación en las reuniones internacionales, en los trabajos de legislación comparada, se refleja bien el trabajo compartido y en colaboración de hombres de procedencia ideológica distinta. El Presidente de la Asociación, el católico Pedro Sangro, subraya ese pluralismo y tolerancia refiriéndose al proceso de constitución de la Asociación Internacional en palabras de uno de sus miembros: «Pertenece a escuelas distintas, que no tienen la misma concepción ni del ideal social, ni de los motivos para perseguirlo, ni de los medios prácticos de llegar a él; pero a todos instruidos por la razón, por el sentimiento, por el estudio y por la experiencia, nos une una doble convicción y esta comunidad de ideas netamente determinadas basta para crear entre nosotros una comunidad de acciones perfectamente definida. La doble convicción que arraiga en nosotros es, de una parte, la de la legitimidad del principio de intervención, y de otra, la de la necesidad de una colaboración internacional. Nos asociamos en una obra de pura solidaridad, sin mira alguna de honores ni de provecho, sin ofrecer a los que nos sigan otra satisfacción que la íntima de concurrir a la mejora moral y material de la multitud de los trabajadores».

Esta larga cita seguramente la suscribiría el propio Sangro para referirse, en 1912, al espíritu de colaboración que presidía los trabajos de la Sección española. A esas alturas se trataba de ampliar los objetivos constituyendo una Unión española para la reforma social como federación de diversas sociedades preexistentes «para el estudio del problema del paro», Liga antipornográfica, Sociedad contra el alcoholismo, Comité español de los congresos internacionales de seguros sociales, y Comité español de Tribunales para niños. Sangro, promotor de la Unión, la entendía como una «extensión» complementaria del IRS: «Ha de ser esa entidad... una especie de "extensión universitaria del Instituto, y representar la divulgación de

sus doctrinas, la reforma social por la libre iniciativa y el internacionalismo de las mismas doctrinas, desde un punto de vista amplio y no de la clase puramente obrera»¹⁷.

Las personas que fundan, presiden y dirigen estas asociaciones, son las mismas que encontramos en el IRS y en el INP. Al igual que en estas instituciones públicas, se observa también la presencia de personas de procedencia ideológica distinta, Dato y Canalejas, Azcárate y Sangro, Buylla y el Vizconde de Eza. Y, en cuanto a socios colectivos, la Universidad Popular de Madrid y la revista *La Paz Social*. En definitiva en estas sociedades para la reforma social, de carácter privado, colaboran una vez más los conservadores y católicos sociales con los liberales reformistas de tradición krauso-institucionista¹⁸.

En las memorias de la Asociación siempre se suele subrayar el espíritu tolerante y abierto que permite esa colaboración como una de sus señas de identidad. Lo que no significa que también surgieran discrepancias y rivalidades. Un ejemplo es la crítica que en medios católicos suscitan las disposiciones gubernamentales, especialmente durante la presidencia de Canalejas, sobre la representación obrera en el IRS, y la naturaleza obrera (profesional) de las asociaciones católicas (Círculos, Sindicatos, etc.). Otra muestra significativa de esas discrepancias encontramos, por ejemplo, en un artículo publicado por Amando Castroviejo en *La Paz Social* en el que se criticaba fuertemente el «liberalismo» de Canalejas, quien en respuesta a una interpelación parlamentaria de Eduardo Sanz y Escartín, había manifestado su resistencia a apoyar desde el Estado la censura directa de formas de propaganda pornográfica¹⁹. Para Castroviejo y para las Ligas antipornográficas la intervención reformadora del Estado no debía limitarse al campo socio-laboral sino que debía abarcar este campo de la reforma moral: «No puede limitarse el intervencionismo estadista— una vez salvada la esfera de la autarquía social, cuya amplitud varía con el estado de mayor o menor actividad de la sociedad— a la cuestión obrera; junto a la política de protección y defensa obrera ha de admitirse una política social en sentido amplio que abarca muchas e importantísimas cuestiones más o

¹⁷ *Memoria de la Asociación*, 1911, 5.º año pág. 44.

¹⁸ En las listas de socios de la Sección española de la Asociación Internacional, publicadas en sus memorias anuales, figuran ya en 1906 y 1907, los católicos Severino Aznar, Amando Castroviejo, Eduardo Dato, Luis Chaves Arias, Vizconde de Eza, Álvaro López Núñez, José Monge y Bernal, Francisco Morán, Ossorio y Gallardo, Rafael Rodríguez de Cepeda, Pedro Sangro, y en años siguientes Inocencio Jiménez, Andreu Pont y Llodrá, Miguel Sastre, Francisco J. Vales Failde. Y junto a ellos, Buylla, Posada, Azcárate, Canalejas, Morote, Julio Puyol, Julián, Uña, Moret, Juderías.

¹⁹ «Catolicismo, intervencionismo y acción social» en *La Paz Social*, (1911), págs. 288-294; la interpelación de Sanz y Escartín y la intervención de Canalejas, el 24 de mayo de 1911.

menos agudas a tenor de la situación de los diversos pueblos (...) el problema de la despoblación por la disminución de la natalidad, (...) la plaga del alcoholismo, (...) el gran contingente de analfabetos, (...) la extensión de la corrosiva gangrena de la pornografía».

De todas formas las discrepancias y rivalidades no debieron ser tan importantes, pues en todas esas asociaciones para la reforma moral en uno u otro campo, que surgen al lado de la Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores, liberales y católicos figuran como dirigentes y como socios, compartiendo unos mismos objetivos reformadores. Nada tiene de extraño que estas iniciativas de reforma moral (como la protección de la infancia abandonada, la liga antipornográfica, la sociedad contra el alcoholismo) que tenían en común la defensa de la familia fueran especialmente queridas por los católicos y en ellas comprometieran especialmente su acción reformista. Esta misma defensa de los valores familiares puede explicar la especial dedicación de los católico-sociales a los trabajos del INP, y a la implantación del seguro de vejez, el de maternidad, el subsidio familiar. La cobertura de esos riesgos era la mejor garantía del mantenimiento y protección de un modelo de familia.

6. CATOLICISMO SOCIAL Y REFORMISMO

KRAUSO-INSTITUCIONISTA: ¿DOS PROYECTOS O MODELOS DE REFORMA SOCIAL?

Una vez señalada la participación y colaboración conjunta de católicos, conservadores e «institucionistas» en las instituciones de la reforma social conviene finalmente tratar de perfilar los caracteres específicos que definen la posición de cada uno de ellos. Se trata de plantear de forma abierta y provisional algunos de los criterios y directrices básicas que orientan sus respectivas cosmovisiones o proyectos de reforma social, para establecer hasta qué punto la convergencia y colaboración en la práctica se correspondía o no con posiciones doctrinales.

6.1. Los «institucionistas»

Para plantear la supuesta o real especificidad de la aportación católica hay que recordar los rasgos principales de la aportación más estudiada por la historiografía, la considerada por algunos casi como la única protagonista de la reforma social: el krauso-institucionismo. Hace tiempo contábamos con la monografía de Elías Díaz sobre el fundamento organicista del reformismo krauso-institucionista; y todavía antes con la caracterización de

conjunto de «los reformadores de la España contemporánea» en la que nos presentó Gómez Molleda²⁰ una visión comprehensiva de la red difusa y la múltiple proyección social del pequeño pero influyente grupo de Giner de los Ríos y su ILE.

Una reciente revisión historiográfica de esta visión en el contexto de una recuperación global del significado del grupo de profesores de Oviedo, puede valernos para un recuerdo actualizado del tema. Por una parte el mejor estudioso del partido reformista, Manuel Suárez Cortina plantea que el reformismo social que gesta y dirige el IRS (Azcárate, Posada y Buylla) constituyen la dimensión o proyección social de este movimiento o partido reformista. Subraya la inserción del proyecto social del IRS en el conjunto del proyecto político del partido reformista, olvidando o dejando en segundo plano el carácter plural y compartido de esas instituciones reformistas (tal como los propios protagonistas, de uno y otro signo político destacan y ponderan en el tiempo y en sus memorias)²¹. Pero al margen de este subrayado exclusivo Suárez Cortina plantea muy bien la matriz ideológica que define ese reformismo social liberal-republicano en sus diversas fases y componentes: el primer organicismo krausista, la integración posterior del positivismo evolucionista (Spencer); y sobre todo la recepción en el cambio de siglo de los fundamentos doctrinales del nuevo «liberalismo social»: la doctrina económica de los «socialistas de cátedra», la sociología de los «solidaristas» franceses, y finalmente el nuevo programa social del liberalismo de Lloid George. La última fase de esa evolución, culminación y crisis a la vez del «sueño de la democracia industrial» se plantea durante la crisis de la Restauración (1917-1923) y se analiza amarga y retrospectivamente por los protagonistas desde el exilio²².

Sin duda las figuras que mejor representan la aportación del nuevo liberalismo español al reformismo social son los profesores de Oviedo, directamente implicados en la gestión del IRS, Posada y Buylla. Ambos, espe-

²⁰ Cfr. E. Díaz, *La filosofía social del krausismo español*, 1973; y M.^a D. Gómez Molleda, *Los reformadores de la España contemporánea*, 1965, CSIC.

²¹ A. Posada, *Fragmento de Memorias*. En ese recuerdo retrospectivo Posada plantea claramente el clima de colaboración suprapartidista con el que nace el IRS; y las contribuciones respectivas de unos y de otros. P. Sangro señala lo mismo en otras publicaciones sobre la sección española de la AIPT. En cualquier caso lo que llama la atención del libro colectivo sobre Institucionismo y reforma social (coordinado por Uría) es precisamente la ausencia de referencia a esos otros compañeros y colaboradores de la misma «reforma social», los conservadores y los católico-sociales.

²² Véase M. Suárez Cortina, «Reformismo laico y “cuestión social” en la España de la Restauración» en J. Uría (coord.) *Institucionismo y reforma social en España*, Madrid, Talasa, 2000, págs. 38-65. Sobre la crisis del sueño reformista véase A. Barrio Alonso, *El sueño de la democracia industrial, (socialismo y democracia en España, 1917-1923)*, Santander, 1996, Universidad de Cantabria.

cialmente el primero, desarrollan paralelamente a su gestión política y administrativa en el IRS, una tarea intelectual de recepción y explicación de los fundamentos doctrinales del reformismo social desde una perspectiva liberal. La trayectoria de A. Posada ya había sido estudiada por F. Laporta, pero la reciente revisión de Jorge Uría señala muy bien la originalidad de su síntesis (con los préstamos extranjeros), con sus límites y contradicciones. Subraya Uría la doble relación recíproca de atracción y rechazo que mantienen estos profesores reformistas en sus contactos con el movimiento obrero organizado y con la realidad del conflicto social: su intento de atraer al socialismo a su proyecto, y su crítica implacable del anarquismo²³. Uría parece destacar las contradicciones o los límites, que finalmente llevan el fracaso de ese proyecto reformista, frente a sus posibilidades y viabilidad. Indudablemente el fracaso histórico de la guerra civil pesa sobre el juicio historiográfico del proyecto social reformista.

6.2. Católicos y conservadores

El catolicismo social y el pensamiento social de los políticos conservadores tiende a converger, incluso se podría decir que son los conservadores los que mejor asumen y expresan los contenidos doctrinales de la *Rerum Novarum* y del catolicismo social. Pero teniendo en cuenta el peso de la división política de los católicos españoles durante la Restauración, como queda de manifiesto en los debates sobre los proyectos de «descanso dominical», conviene siempre distinguir entre la posición conservadora y católica que pueden representar las obras de Eduardo Sanz y Escartín y los discursos académicos de Eduardo Dato, y la posición estrictamente católica de los propagandistas y publicistas del catolicismo social; no olvidando que las obras y organizaciones del catolicismo social son una parte de un Movimiento Católico más global²⁴.

Así es que dentro del reformismo social católico se puede estudiar en primer lugar el proceso de convergencia entre conservadores y católicos que queda bien representado en el pensamiento social de Eduardo Sanz y Escartín (su trilogía sobre la «cuestión social» entre 1890 y 1896), y en los discursos académicos de Dato, en 1909 en la Academia de Jurisprudencia y en 1910 en la de Ciencias Morales y Políticas sobre «la justicia social», su compatibilidad con la caridad cristiana; y sus diferencias con el «soli-

²³ J. Uría, «Posada, el Grupo de Oviedo y la percepción del conflicto social», en *Institucionismo y reforma social*, op. cit., págs. 109-145.

²⁴ Véase una breve síntesis en F. Montero, *El Movimiento Católico en España*, Eudema, 1993.

darismo». Mientras que el pensamiento del catolicismo social en sentido estricto se va configurando en torno a las primeras revistas sociales (la *Revista Católica de Cuestiones Sociales*, la *Revista Social*, la *Paz Social*), en los Congresos católicos y Semanas sociales, en algunos publicistas propios como el jesuita Antonio Vicent o más tarde Severino Aznar o Amando Castroviejo, y en bastantes traducciones de los publicistas europeos. Como ocurre en Europa no es un pensamiento único sino que está atravesado por debates internos especialmente en relación con la naturaleza de los sindicatos cristianos, su confesionalidad y su autonomía obrera. La mejor expresión, un poco tardía, de un pensamiento católico-social español colectivo es la constitución del Grupo de la Democracia Cristiana hacia 1919: su programa-manifiesto y su modelo sindical chocaron con las resistencias integristas y paternalistas que les denunciaron como «modernistas»²⁵.

6.3. Criterios compartidos y divergentes

¿Cuáles son los rasgos específicos que definen y caracterizan el reformismo social de los católicos y los conservadores en comparación con la posición de los liberales? ¿Y cuáles son los rasgos que comparten? La comparación se podría establecer en particular, centrando el estudio en el análisis contrastado del discurso de algunas figuras muy representativas de cada grupo como: Dato frente a Canalejas, o Severino Aznar y P. Sangro frente a Posada y Buylla. Pero aquí se ha optado por una perspectiva de aproximación general. Para este análisis comparado de criterios convergentes o divergentes en relación con los objetivos de la reforma social nos fijaremos en unas cuestiones claves como el organicismo corporativista, el asociacionismo obrero y la reforma moral como horizonte de la reforma social.

6.4. En torno al organicismo corporativo

En primer lugar parece apreciarse un alto grado de convergencia entre el organicismo armónico de los krausistas y la armonía social neogremlialista del catolicismo social. En ambos casos, frente a la lucha de clases, se trata de restablecer unas relaciones sociales armónicas y encauzar el conflicto social mediante instancias neocorporativas: jurados mixtos, tribunales de conciliación, etc.

Compartiendo ese mismo horizonte armónico neocorporativista la divergencia se puede apreciar en relación con el modelo asociativo obrero

²⁵ Véase F. Montero, *El Movimiento Católico*, op. cit., págs. 46-49.

que unos y otros propugnan. Para los católicos sociales el ideal asociativo propugnado por la propia *Rerum Novarum* es el «sindicato mixto», y sólo lentamente, especialmente en el caso español, se va abriendo camino la aceptación realista del sindicato «puro». Para los institucionistas el asociacionismo obrero independiente es la base indispensable. Así lo planteaba por ejemplo Canalejas en su discurso de 1905 en la Academia de Jurisprudencia subrayando la importancia del sindicalismo obrero como base de una nueva organización social («la democracia industrial»). Por supuesto se trataría de un asociacionismo obrero profesional, preferentemente cooperativo, alejado de cualquier proyecto social o político revolucionario; de ahí la tensión de los reformistas institucionistas con el socialismo y su descalificación total del anarquismo.

Estas diferencias en torno al modelo asociativo pueden explicar la polémica por el rechazo gubernamental de las asociaciones católicas, por su carácter «mixto» y confesional, en las elecciones de 1908 para la representación obrera en las instituciones reformistas las Juntas Locales y Provinciales de Reformas Sociales; y los jurados mixtos y posteriores comités paritarios²⁶. En cualquier caso, a medida que la conflictividad social se radicaliza y el sistema parlamentario se debilita (crisis de la posguerra en Europa y del sistema político de la Restauración en España) se refuerza desde diversos frentes la propuesta corporativista, no sólo en el terreno de las relaciones laborales (jurados mixtos) sino en el terreno político. Y aun teniendo en cuenta las diferentes perspectivas llama la atención el consenso y la convergencia al respecto.

6.5. Protección frente a emancipación

Muy ligada a esta cuestión del asociacionismo obrero estaría una cuestión de fondo sobre el carácter más o menos paternalista del reformismo social católico. Leopoldo Eugenio Palacios lo planteaba bien en su discurso necrológico sobre la política social de Dato en la Academia de Jurisprudencia. A la altura de 1921, en medio de la violenta conflictividad sindical, de la que el propio Dato había sido víctima, el proyecto reformista bien intencionado había quedado desbordado. En opinión de Palacios el «talón de Aquiles» de ese proyecto era el predominio del criterio proteccionista sobre el emancipador. En esta contraposición de criterios —protección frente a emancipación— parece sugerir Palacios la diferencia entre los dos tipos de reformismo. Proteccionismo paternalista frente a respeto y promo-

²⁶ Polémica que se refleja en las páginas de *La Paz Social...*, cfr. J. Andrés Gallego, *Penamiento y acción social... op. cit.*, págs. 252 y ss.

ción de la emancipación o autonomía obrera pueden efectivamente definir, al menos inicialmente, un reformismo diferente.²⁷ Lo que ocurre es que en 1921 el «sueño de la democracia industrial» basado en la integración y superación armónica, corporativa, de los intereses encontrados, tampoco había logrado integrar el anarcosindicalismo revolucionario en marcha²⁷. La frustración o el fracaso de los proyectos reformistas era global: afectaba tanto a las iniciativas católicas y conservadoras como a las «institucionistas».

6.6. En torno al intervencionismo moderado o subsidiario

Como se ha señalado el inicio y la base del reformismo social parte de la afirmación del principio «intervencionista» frente al intocable abstencionismo liberal. En este terreno todos, católicos, conservadores e institucionistas, parecen compartir inicialmente un criterio análogo: un intervencionismo moderado, «tutelar», preferentemente sólo aplicable a los casos extremos y a los más indefensos, el trabajo de las mujeres y los niños. Un intervencionismo subsidiario respetuoso con el papel protagonista que todos conceden a la iniciativa de los agentes sociales: familia, asociaciones obreras, iniciativas patronales o filantrópicas. Iniciativas que el Estado nunca debería ahogar.

Progresivamente ese intervencionismo moderado y prudente se va haciendo más decidido por parte de todos aunque especialmente los católicos insisten en su carácter subsidiario. Los límites y condiciones del intervencionismo estatal los marcaba con esta rotundidad Pedro Sangro en la Semana Social de Barcelona (1910) en su conferencia sobre «La intervención del Estado y del Municipio en las cuestiones obreras según los principios católico-sociales»:

«1.º En principio no es de desear. 2.º No todo debe exigirse al Estado. 3.º Actualmente es indispensable porque los reclaman la justicia y el interés público. (...) 6.º La intervención debe limitarse a lo estrictamente necesario, según las circunstancias requieran sin absorber la esfera de acción del individuo ni de la familia. 7.º Su misión principal es la protección de los derechos y la represión de los abusos, que dañan el bien general. 8.º La misión más concreta es proteger a los débiles y dirigir a los fuertes, templando la crueldad de las leyes económicas (...) 10.º La intervención debe asegurar a un mismo tiempo el respeto a los bienes del alma y a los del cuerpo. 11.º Es ilegítima la que no respeta el derecho de propiedad priva-

²⁷ Cfr. A. Barrio, *El sueño de la democracia industrial*, Universidad de Cantabria, 1996.

da y a la libre asociación, salvo en este caso razones supremas de pública utilidad. 12.º A la realización de todo programa social ha de concurrir con la ley la organización profesional. 13.º Debe tenderse a hacer innecesaria la intervención del Estado»²⁸.

En esta misma fecha Dato en su discurso en la Academia sobre la «justicia social» marcaba también los límites del intervencionismo, mientras que Canalejas, en su discurso en la de Jurisprudencia en 1905, en nombre del nuevo liberalismo social emergente, defendía un intervencionismo estatal y municipal más amplio aunque no absorbente. Una comparación global de los respectivos discursos académicos de Dato y Canalejas ilustraría bien las convergencias y divergencias de los reformismos católico-conservador y liberal que ambos representan.

6.7. Reforma social y reforma moral. La familia y el trabajo de la mujer

Más allá de semejanzas y convergencias en el terreno de las iniciativas concretas y las instituciones es indudable la existencia de diferencias de fondo sobre el concepto de la reforma social como reforma moral, y sobre el papel del individuo moralmente reformado en el conjunto del proceso social. Para los católico-sociales no bastan las reformas laborales si no van acompañadas de otras políticas de defensa de la familia y de un determinado orden moral (liga antialcohólica, liga antipornográfica, trata de blancas, protección de los menores...). Por ello la política social del Estado, propugnada por los católicos, debía incluir otros problemas además de los estrictamente obreros como planteaba Amando Castroviejo en un artículo en *La Paz Social* polémico como la política liberal de Canalejas: «Junto a la política de protección y defensa obrera ha de admitirse una política social en sentido amplio que abarca muchas e importantísimas cuestiones más o menos agudas (...). El problema de la despoblación por la disminución de la natalidad, (...) la plaga del alcoholismo..., el gran contingente de analfabetos... la extensión de la corrosiva gangrena de la pornografía...».

Unos y otros se plantean la reforma social como un proyecto de reforma moral individual y social. Para los krausistas, desde el fracaso de la revolución del 68 y del sexenio subsiguiente, la revolución necesaria es ante todo una revolución educativa y moral (Giner y la Institución Libre de Enseñanza). Lo que varían son los fundamentos filosóficos o teológicos y el ideal humano.

²⁸ *Crónica 5.ª Semana Social*, Barcelona, 1912.

Para los «institucionistas» y el nuevo liberalismo social una base doctrinal es el «solidarismo», sobre todo francés, de filósofos y sociólogos. Para un católico y conservador como Dato no basta. Frente al secular solidarismo filantrópico apela a la superioridad de la doctrina cristiana sobre la caridad y la justicia social. Criterios que entiende perfectamente compatibles siempre que no se reduzca la caridad a la limosna²⁹.

En cualquier caso y al margen de esta contraposición entre solidarismo y caridad-justicia social que plantea Dato en su discurso en la Academia de Ciencias Morales, la evolución mental desde la caridad a la justicia social es uno de los hilos conductores para definir la novedad del catolicismo social y la *Rerum Novarum*. Durante mucho tiempo debajo de los nuevos términos, justicia social, podrán subyacer viejas actitudes asistenciales o benéficas, pero la misma asunción del nuevo concepto de salario justo marca el salto cualitativo que supone el nacimiento del catolicismo social como una mentalidad diferente.

Como se sabe, una de las primeras intervenciones del Estado se plantea en relación con la regulación del trabajo de la mujer, siempre ligada a la de los «menores» necesitados de tutela. En relación con este tema parece existir un amplio consenso, tal como se refleja en las distintas leyes protectoras nacionales e internacionales, detrás del cual subyacería una concepción análoga sobre el papel de la mujer en la familia y sobre la condición de la mujer trabajadora: el trabajo de la mujer como mal menor; necesidad de proteger su principal rol femenino (seguro de maternidad).

Ahora bien, dentro de ese amplio consenso masculino también se plantean algunas significativas diferencias. En primer lugar, en este caso, entre socialistas y católicos, como lo registraba Rodríguez de Cepeda en su crónica del Congreso Internacional de Zurich (1897) sobre la protección legal de los trabajadores: «Presentaron los católicos una conclusión, en la que se proponía la abolición lenta y gradual del trabajo de la mujer en fábricas, minas y canteras, y a ella se opusieron los socialistas, que sostuvieron que la mujer debía tener derecho a ocuparse en toda clase de trabajos, y que lo único que debía hacerse era reglamentar éstos para evitar abusos. Fue ésta la discusión capital. Bebel por los socialistas y Decurtins por los católicos expusieron sus respectivos puntos de vista sobre la familia y la misión de la mujer en la sociedad, sosteniendo el católico que el matrimonio era la categoría filosófica y no histórica, como pretendían los socialistas»³⁰.

²⁹ En su discurso en la Academia de Ciencias Morales en 1910, Dato plantea esta crítica y contraposición del solidarismo con la caridad cristiana y la justicia social.

³⁰ En el *Boletín del CNCCO*, octubre 1897, pág. 2.

Dentro del consenso general sobre el modelo de mujer y familia que subyace en los primeros proyectos protectores del trabajo de la mujer los criterios institucionistas y los católicos no son los mismos. La Institución Libre de Enseñanza, como sabemos, fue pionera en iniciativas educativas específicamente pensadas para una cierta emancipación de la mujer. El catolicismo social sólo en la segunda década del siglo xx comenzó a promover claramente instituciones educativas, sindicales y mutualistas protectoras y defensoras de una dignidad femenina que ponía parcialmente en cuestión el exclusivo modelo doméstico³¹. Pero lo que domina claramente el reformismo social católico y conservador es una preocupación central por la protección del modelo de familia tradicional, y dentro de ella la salvaguarda del papel de la mujer como madre y esposa, como principal instrumento de mantenimiento o recuperación de una sociedad cristiana:

«En esta política de protección de la familia tradicional se inscribe la consideración del trabajo de la mujer fuera de casa como un mal menor, que subyace en los proyectos y comentarios católicos sobre leyes protectoras del trabajo de la mujer, la preocupación por el establecimiento de un salario familiar mínimo, y el desarrollo de una política de previsión familiar, desde el seguro de maternidad hasta el subsidio familiar. Pero también en esta línea de protección a la familia se inscriben la legislación sobre “casas baratas” y toda la política de protección a la pequeña propiedad agraria familiar»³².

6.8. Catolicismo versus secularización

Pero el reformismo social de los católicos no se entiende bien si no se comprende como parte de un proyecto pastoral global de recristianización y catequesis. Este es el motor principal y el objetivo final de la reforma social desde la perspectiva católica, y es también la razón del recelo o rechazo con que a menudo es percibida desde la perspectiva secularizadora de los «institucionistas», y, más aún de los socialistas: «Para comprender la posición de los católicos ante determinados aspectos de la reforma social y su atención prioritaria a temas como el del descanso dominical o toda la legislación protectora de la familia, hay que tener en cuenta la cosmovisión que subyace y engloba toda la visión católica de la «cuestión social». En primer lugar no hay que perder de vista que la interpretación teológica que engloba las múltiples cuestiones y problemas sociales en una

³¹ Véase la tesis inédita de Amelia García Checa, sobre *La acción social católica femenina en Barcelona, 1900-1930*, Universidad de Barcelona, 2001.

³² Cfr. F. Montero, (1984), págs. 59-60.

sola, cuya raíz es una causa religiosa-moral, el liberalismo, siempre subyace en las distintas manifestaciones del reformismo social católico. El catolicismo social es en una gran medida una prolongación de la lucha contra el liberalismo. La verdadera clave de la superación del conflicto social está en la doctrina de la Iglesia. Reforma social y reconquista cristiana o recristianización del «pueblo perdido» por la propaganda liberal y socialista son tareas coincidentes³³. Desde esta perspectiva se pueden entender la importancia que el reformismo social católico concede al proyecto de «descanso dominical» o a la identidad o confesionalidad de sus obras, y en concreto de sus sindicatos, aunque ello le bloquee o le prive de representación en las instituciones públicas.

Al mismo tiempo que colaboran en la reforma social, católicos, conservadores e «institucionistas» están embarcados en la polémica secularizadora sobre el papel y el lugar de la Iglesia y de las congregaciones religiosas en el nuevo Estado. El laicismo moderado de los «institucionistas» como Azcárate o Canalejas distingue entre «la secularización del Estado y la de la sociedad». Sólo dicen propugnar la primera pero el combate clericalismo-anticlericalismo se plantea en todos los terrenos, también en el de las obras sociales.

Inevitablemente ese solapamiento subyacente de la cuestión clericalismo-anticlericalismo incide y provoca conflictos en el proceso convergente del reformismo social. Los sucesivos debates sobre los proyectos de descanso dominical (1891, 1900, 1904) ilustran muy bien, como ya lo hemos señalado, ese solapamiento del debate político-religioso en el debate propiamente social: la interpretación del artículo 11 de la Constitución de 1876 (y el consiguiente debate entre integristas, posibilistas y secularizadores) se convierte en la cuestión principal, desplazando y bloqueando el debate propiamente social del «descanso semanal»³⁴.

En suma, podríamos sintetizar la contribución específica de los católicos a la reforma social en los siguientes criterios relativa o fundamentalmente diferentes de las otras contribuciones:

- Armonía *versus* lucha de clases; y en consecuencia, preferencia por el sindicato mixto, y la acción protectoral paternal (patronal). Como mal menor, arbitraje y negociación entre las partes, sobre la base de un asociacionismo obrero profesional (el mito del gremio y su posible restauración modernizada); y los jurados mixtos.

³³ Cfr. F. Montero (1984), pág. 58.

³⁴ Todavía Severino Aznar en 1910 se refería al desdén del gobierno Canalejas por el cumplimiento de la Ley de Descanso dominical, cfr., *Impresiones de un demócrata cristiano*, 1931, págs. 130-131.

- Frente a la revolución la evolución, frente a la subversión el orden social defensa prioritaria del orden social y de las autoridades establecidas.
- Intervencionismo moderado y subsidiario del Estado que deje a salvo la iniciativa preferente de los agentes sociales.
- Reforma moral del individuo como parte de un proyecto recristianizador total. Y unido a ello defensa y reivindicación del lugar y el papel de la Iglesia en el nuevo orden liberal: movimiento católico frente a la secularización.